

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 48
O R D I N A R I A
MARTES 3 DE MAYO DE 2016

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos del martes tres de mayo de dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta y siete ordinaria, celebrada el lunes dos de mayo del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes tres de mayo de dos mil dieciséis:

I. 222/2014

Contradicción de tesis 222/2014, suscitada entre la Primera y la Segunda Salsa de la Suprema corte de Justicia de la Nación al resolver, por una parte, el amparo directo en revisión 263/2015 y, por la otra, los amparos directos en revisión 1317/2000, 295/2001 y 449/2011. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: *“ÚNICO. Queda sin materia la contradicción de tesis”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos I y II relativos, respectivamente, a la competencia y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando III, relativo a la existencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el considerando IV, denominado “sin materia”. Apuntó que la materia de la presente contradicción radica en esclarecer si

el posible trato desigual de las sanciones administrativas, previstas en la Ley Aduanera, debe estudiarse a la luz del principio de equidad tributaria —artículo 31, fracción IV, constitucional— o mediante el principio de igualdad —artículo 1º constitucional—. Aclaró que se trata del sistema de infracciones y sanciones administrativas de los artículos 182, 183 y 183-A de la Ley Aduanera, respecto del destino de mercancías de importación-exportación, por ejemplo, cuando, sin autorización de la autoridad aduanera, se enajena un vehículo que fue importado temporalmente al país, o bien, aquellas infracciones cuando se exceden los plazos, por ejemplo, para el retorno de mercancías de importación o de exportación de ese sistema. Recordó que la Segunda Sala analizó los casos sometidos a su consideración a la luz del principio de equidad tributaria, mientras que, la Primera Sala, con fundamento en el derecho de igualdad, por lo que existe la contradicción de criterios entre ambas Salas.

No obstante, señaló que el proyecto propone declarar sin materia la contradicción de tesis porque, durante la tramitación de la denuncia, el cinco de noviembre de dos mil catorce, la Segunda Sala falló el amparo directo en revisión 3131/2014, en el cual consideró que el trato diferenciado en el sistema de sanciones administrativas de la Ley Aduanera debe examinarse a la luz del derecho de igualdad.

Modificó el proyecto con las observaciones remitidas por el señor Ministro Franco González Salas, que no

cambian el sentido del proyecto, pero precisan algunas cuestiones referentes a las tesis aisladas de la Segunda Sala.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando IV, denominado “sin materia”, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 181/2015

Contradicción de tesis 181/2015, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver, respectivamente, los recursos de queja 45/2015 y 81/2015. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: *“ÚNICO. Ha quedado sin materia la contradicción de tesis 181/2015, a que este expediente se refiere”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III y IV relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite, a la

competencia y legitimación y a la existencia de la contradicción, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el apartado final, denominado “implementación del sistema de expediente electrónico”. Precisó que el tema a dilucidar consiste en la posibilidad o no de dar acceso al expediente electrónico a las partes autorizadas en el juicio de amparo, aun cuando el Consejo de la Judicatura Federal o esta Suprema Corte no hayan emitido la normatividad correspondiente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, recordó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó que no era posible conceder el acceso al expediente vía electrónica, y que ello no afectaba el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, pues los autorizados en el juicio de amparo contaban con la posibilidad de consultar el expediente físico; mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito estimó que era posible otorgar el acceso al considerar que, a pesar de que el Consejo de la Judicatura no había expedido el reglamento para la implementación del sistema de expediente electrónico y la firma electrónica, existían diversos acuerdos de cuya

interpretación se deriva el derecho a la consulta del expediente electrónico.

No obstante lo anterior, en el proyecto se precisa que el Consejo de la Judicatura y este Alto Tribunal emitieron el Acuerdo General conjunto 1/2015, publicado en el Diario Federal de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula e implementa la tramitación electrónica obligatoria del juicio de amparo en los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a partir del cuatro de enero de dos mil seis y, en tal virtud, el tema estudio de esta contradicción de criterios ha quedado superado, por lo que se propone declararla sin materia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado final, denominado “implementación del sistema de expediente electrónico”, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

III. 542/2012

Contradicción de tesis 542/2012, suscitada entre el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver, respectivamente las quejas 54/2012 y 17/2000. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se propuso: *“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis. SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo”*. La tesis a que hace referencia el punto resolutivo segundo tiene por rubro: *“GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS, INCIDENTE DE. EL PLAZO DE SEIS MESES, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, SE COMPUTA PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y/O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III y IV relativos, respectivamente, a los antecedentes del caso, a la competencia, a la legitimación y a los criterios denunciados, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina

Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado V, relativo a la existencia de la contradicción, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena presentó el apartado VI, relativo al estudio de fondo. Puntualizó que el problema consiste en determinar si la notificación que debe servir como punto de partida, para computar el plazo para la interposición del incidente regulado por el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, es la que lleva acabo, ya sea esta Suprema Corte y/o el Tribunal Colegiado de Circuito, de la sentencia que se ha dictado en el recurso de revisión, o bien, el juez de distrito, a quien, junto con el oficio correspondiente, acompañarán testimonio de dicha resolución dictada.

Recordó que esto provocó que los tribunales contendientes arribaran a conclusiones diversas acerca de cuál de las dos notificaciones marca el inicio del cómputo del plazo de seis meses concedido por el citado artículo 129 para la interposición del incidente de reparación de daños y perjuicios.

El proyecto propone determinar que, si bien el artículo 104 de la Ley de Amparo abrogada prevé la obligación a cargo del juzgado de distrito de notificar a las partes la ejecutoria dictada en la revisión, lo cierto es que esa notificación es parte del cumplimiento de la sentencia ejecutoria que concede o confirma la protección constitucional, como puede inferirse incluso del hecho de que el artículo 104 enfatice la notificación a las autoridades responsables y de que sea justamente el juez de distrito el encargado de supervisar el cumplimiento de la ejecutoria dictada; entonces, la notificación contenida y regulada por el artículo 104 tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de la sentencia en caso de que la protección constitucional fuera concedida, pero si la revisión culminara con la negativa de la protección constitucional solicitada, no habría autoridad responsable a quien notificar la sentencia que deben cumplir ni habría autoridades responsables cuyo cumplimiento supervisar y, por ende, no habría una segunda notificación en este caso, a pesar de que, en efecto, se hubieran otorgado garantías o contragarantías a propósito de la suspensión. Por tanto, la notificación que debe prevalecer para iniciar el cómputo del plazo de seis meses para la interposición del incidente de daños y perjuicios, una vez causada ejecutoria la sentencia dictada en el recurso de revisión de un amparo indirecto, es la que lleva a cabo esta Suprema Corte y/o el Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo con las reglas generales para las notificaciones estipuladas en el artículo 29 de la Ley de Amparo abrogada.

La señora Ministra Luna Ramos recapituló que el problema consiste en establecer a partir de cuándo correrá el plazo de seis meses para la promoción del incidente de daños y perjuicios, para hacer efectiva la garantía de la suspensión. Recordó que, en un juicio de amparo, si se pide la suspensión, puede ser concedida con la fijación de una garantía para que surta sus efectos, y se continúa el trámite del juicio para, finalmente, dictar la sentencia definitiva respectiva; esta sentencia puede causar estado, porque no se combata, o bien, combatiéndose, puede ser confirmada, revocada o modificada, mediante recurso de revisión y, con esta resolución, es que adquiere firmeza la sentencia, con lo cual, quien se sintió afectado por la suspensión puede hacer valer la garantía que se impuso, en términos del artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, que reza “Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común”.

Retomó que la divergencia de criterios consistió en que, mientras un tribunal colegiado dijo que estos seis meses corrían a partir de que se notificaba la ejecutoria pronunciada en un recurso de revisión por el tribunal colegiado o por esta Suprema Corte, el otro tribunal colegiado sostuvo que los seis meses se contaban a partir de que el juez de distrito, tras recibir la ejecutoria correspondiente, la da a conocer a las partes. Al respecto, el proyecto propone determinar que debe computarse dicho plazo a partir de la notificación que se haga por el tribunal colegiado o por esta Suprema Corte al momento de resolver el recurso de revisión correspondiente; sin embargo, estimó que el proyecto no valora si la notificación se hace o no de manera adecuada, sino sólo prevé que se haga conforme a la Ley de Amparo anterior.

Precisó que las formas de notificar son: a las partes personalmente, a las autoridades por oficio; no obstante, el problema se presenta cuando el tribunal colegiado de circuito resuelve, pues no en todos los casos se notifica personalmente la ejecutoria, sino que se notifica por lista, siendo que existe jurisprudencia de la Segunda Sala en la cual se indicó que, en amparo directo, era necesario notificar personalmente si en la demanda se planteó la inconstitucionalidad de alguna norma general o la interpretación directa de un precepto constitucional, independientemente de que el tribunal colegiado de circuito se hubiere o no pronunciado al respecto.

Por otra parte, advirtió que, normalmente y corroborando el dato con la Secretaría de Acuerdos, cuando se resuelve un recurso de revisión por esta Suprema Corte o por los tribunales colegiados, tras la elaboración del engrose no se notifica personalmente a las partes, sino que devuelve el asunto al juzgado de distrito, el cual, con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Amparo anterior, da a conocer la ejecutoria y manda copia a las partes y a las autoridades, por lo que, si bien el referido artículo enuncia “En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes”, se ha entendido por los juzgados de distrito y tribunales colegiados en el sentido de que, hasta el momento en que se devuelve al juzgado de distrito es cuando se da a conocer la ejecutoria a las partes.

En ese tenor, la idea fundamental es no duplicar notificaciones, en el entendido de que, si las partes se enteran de la resolución por lista, pueden solicitar copia a la Suprema Corte o al tribunal colegiado, pero no existe obligación de que estos dos órganos notifiquen la ejecutoria a las partes, sino que la tiene el juez de distrito, por virtud del

artículo 104, una vez que recibe la ejecutoria correspondiente, máxime que, en la práctica, no se hace así.

Por tales razones, consideró que el plazo de seis meses que establece el referido artículo 129, para el incidente de daños y perjuicios en materia de suspensión para hacer efectivas las garantías, debe computarse a partir de la fecha en que, de acuerdo con el citado precepto 104, se da a conocer la ejecutoria por el juez de distrito.

El señor Ministro Pardo Rebolledo observó que pareciera ser que el problema se reduce a determinar cuál es la notificación que debe tomarse en cuenta para computar los seis meses que establecía el artículo 129 de la Ley de Amparo anterior, y que, normalmente, se presenta un dilema de dos notificaciones: 1) la del tribunal colegiado o la de esta Suprema Corte, al resolver el recurso de revisión, el cual se notifica por lista a las partes, y 2) la que debe realizar el juzgado de distrito cuando recibe los autos, una vez resuelto el recurso de revisión. Resaltó que la propuesta del proyecto es determinar que debe tomarse en cuenta la notificación del tribunal colegiado o de esta Suprema Corte en cuanto resuelve el recurso de revisión; sin embargo, en la Primera Sala se ha sostenido que, cuando existen varias notificaciones válidas respecto de la misma resolución y no se ha declarado nula ninguna, el interesado puede elegir la que mejor le convenga.

En ese contexto, al existir dos notificaciones, podría haber una diferencia temporal entre una y otra, lo cual sería

determinante para la oportunidad de la promoción del incidente para hacer efectivas las garantías y las contragarantías. Por tanto, si hay dos notificaciones, no habría razón para tomar en cuenta la que perjudica al justiciable, es decir, la que empezó a correr primero y no la posterior, sino que, más bien, debería quedar a elección del afectado.

Por otro lado, observó que podría haber varias hipótesis que no se ajustan exactamente a la solución del proyecto, por ejemplo, cuando un tribunal colegiado emite una resolución de esta naturaleza y, tratándose del amparo indirecto, no resultaría muy claro que el juzgado de distrito tenga que notificar personalmente y correr traslado del testimonio de la resolución, sino que así interpreta la señora Ministra Luna Ramos el artículo 104, pero los preceptos que regulan las notificaciones no lo establecen como una hipótesis de notificación personal. Aclaró que, no obstante, esa propuesta sería ideal porque generaría mayor seguridad jurídica y, si así lo determinara este Tribunal Pleno, no estaría en contra, insistiendo en que no tendría por qué tomarse en cuenta la primera notificación, si existe una posterior que también es válida.

Advirtió que se debe considerar otra circunstancia fáctica: cuando una persona, que tiene interés en promover el incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía, no fue la que interpuso la revisión, es decir, no está al pendiente del trámite de la revisión, sino únicamente de

cuándo regresan los autos al juzgado; respecto de lo cual estimó que sería más conveniente tomar en cuenta la notificación del juzgado, porque en esa notificación será cuando se tenga la certeza de que la sentencia ha causado ejecutoria y, en consecuencia, empezaría a correr el plazo de seis meses para hacer valer este incidente. Por estas razones, no compartió la propuesta del proyecto, y estaría por una solución diversa.

El señor Ministro Pérez Dayán hizo hincapié en que el proyecto concluye que el plazo para interponer el incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía comienza a partir de que el órgano de revisión hace la notificación, con lo cual coincidió, ya que, si bien de acuerdo con el sistema establecido en la anterior Ley de Amparo pueden presentarse dos notificaciones, lo interesante es determinar cuándo se está legalmente informado de la sentencia que ha causado estado, siendo que difícilmente se podría pensar que un juez de distrito, que aún no ha recibido la ejecutoria dictada por el tribunal que revisó, pueda dar lugar a abrir el incidente correspondiente.

Asimismo, concordó con la parte esencial de la tesis que propone que, si el tribunal de revisión hizo una notificación legal, el particular o quien tenga que hacer efectiva esa garantía sabe que ya puede ejercer su derecho para, tras su inicio y después de agotadas las etapas procesales, se decida a hacer o no efectiva la garantía o la contragarantía.

Aclaró que la doble notificación en nada incide con la oportunidad que tuvo para conocer de la resolución y presentar esta solicitud, sino que el particular o el titular del derecho ya está en condiciones, desde la primera notificación, para hacer efectiva la garantía, es decir, hacerla saber al órgano correspondiente para que inicie el trámite incidental, a efecto de determinar lo conducente acerca de la garantía o contragarantía. Apuntó que si, aun con la primera notificación especificada, el órgano revisado, al recibir el expediente, decide hacer una nueva notificación al considerar que no estaba legalmente notificado por primera vez, ello no obsta para considerar que ya comenzó el tiempo para hacer efectivo este derecho y, por tanto, hacerlo valer en los plazos que establece la norma. Subrayó que si se demuestra que la primera notificación surtió todos sus efectos legales, aun ante una eventual segunda notificación, resulta evidente que la oportunidad se genera con la primera de ellas. Por ello, se reiteró de acuerdo con el proyecto.

La señora Ministra Piña Hernández compartió lo señalado por los señores Ministros Luna Ramos y Pardo Rebolledo porque, si bien, en principio, la norma indica que el incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo, podrían presentarse muchos supuestos prácticos: 1) cuando un tribunal colegiado da trámite a un recurso de revisión, lo remite a esta Suprema Corte y ésta lo admite, por lo que está *sub judice* porque no ha regresado los autos al juzgado de distrito, y 2) cuando esta Suprema

Corte publica la lista con el sentido de la resolución, pero la ejecutoria tarda varios meses o días en regresar, por lo que constituiría un cómputo que corre en perjuicio del propio incidentista.

Por tanto, y para privilegiar la seguridad jurídica, el plazo debe computarse a partir de la notificación de la ejecutoria de amparo realizada por el juez de distrito, cuando regresan los autos al juzgado del conocimiento.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena indicó haber consultado a diversos tribunales colegiados lo que sucedía en la práctica, y se informó de que se presentan las dos situaciones relatadas, por lo que este Tribunal Pleno tiene una verdadera necesidad de unificar criterio en todo el Poder Judicial de la Federación.

Recordó que, originalmente, el proyecto se había basado en la notificación del juez. Aclaró que había tres opciones de resolución: 1) la costumbre como fuente de derecho, 2) la normativa en torno al artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, y 3) la *pro homine* que ha adoptado en algunos casos la Primera Sala.

Puntualizó que el proyecto se decantó por el aspecto normativo, en la inteligencia de que, aun cuando la notificación sea por lista por el órgano revisor, empiezan a correr los seis meses, y si bien existe la práctica —aun casi generalizada— de notificar personalmente por el juzgado de

distrito, esta práctica no varía la *ratio legis* de la norma. Por estas razones, sostuvo el proyecto.

Adelantó que, si la mayoría del Tribunal Pleno se decanta por la notificación del juez, no tendría inconveniente en elaborar el engrose en ese sentido.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció en contra del proyecto pues, si bien debe tomarse en cuenta la notificación de la sentencia que quede firme, en los tribunales colegiados y en esta Suprema Corte existen hasta tres formas de notificar esa sentencia: 1) según el artículo 191 de la Ley de Amparo anterior, al término de la sesión se publicará una lista en la que se pondrá el sentido de la resolución, 2) después se hace una notificación por lista, como referían los artículos 28 y 29 de dicha ley, y 3) cuando se manda al juzgado de distrito de origen, entonces el juez manda a notificar la sentencia.

Advirtió que, en ninguno de estos casos, excepto en materia penal, se ordena una notificación personal, sino solamente por lista, de tal modo que el interesado debe solicitar una copia de la resolución para poder enterarse de su contenido y, cuando se entrega esa copia, se deja razón de su entrega, con lo cual formalmente se tiene otra forma de conocimiento de la resolución. Con ello, recalcó que, cuando se publica por lista, el interesado en realidad no conoce el contenido de la resolución, por lo que estimó que, para poder establecer que se conoce realmente la resolución, se precisaría de una notificación personal con un

testimonio de la resolución que se dictó, y si bien la anterior Ley de Amparo no lo señalaba expresamente en ese sentido, su artículo 30 contemplaba el supuesto para que el órgano jurisdiccional ordenara la notificación personal en los casos en que considerara conveniente hacerlo.

Por tanto, consideró que, cuando se recibe la notificación y el testimonio del contenido de la resolución, es cuando debe correr el plazo para efectos de la interposición del incidente respectivo, en aras de generar certeza en el cómputo, y siendo que ni el tribunal colegiado ni esta Suprema Corte cuenta con el personal suficiente para, por ejemplo, notificar personalmente una sentencia en otro Estado de la República, entonces debe estimarse que lo correcto sería que lo efectúe el juzgado de distrito, una vez que cuente con todos los elementos para hacerlo.

El señor Ministro Cossío Díaz valoró que el juez de distrito debe ordenar la notificación personal, por lo que si bien existen otras prácticas, la ley debe construirse también jurisprudencialmente, siendo que ahora se cuenta con un elemento adicional pro persona, como indicó el señor Ministro Pardo Rebolledo y, consecuentemente, no sólo se trata de dar claridad al orden jurídico, sino de facilitar la defensa de las personas, de manera que, sin violentar abiertamente el texto de la ley, se genere una interpretación sistemática del asunto. En ese sentido, estimó que se debe tomar en cuenta esta última notificación personal para, de ahí, contar el plazo correspondiente.

Observó que las participaciones de los señores Ministros representan las experiencias que, cada uno, ha vivido, y si bien se pudieran citar muchos ejemplos, lo trascendente es tratar de imprimir racionalidad al sistema. Concluyó estar en el sentido manifestado por los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Piña Hernández.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció en favor del proyecto, puesto que no se trata de un tema de dobles o triples notificaciones ni tampoco de resolver absolutamente todos los problemas prácticos que se puedan presentar, sino simplemente cuál es la notificación a partir de la cual contabilizar el plazo en cuestión.

Apuntó que, respecto de notificar personalmente todas las sentencias de amparo, la Primera Sala ha establecido alternativas a esto por razones de imposibilidad y de complicaciones de tiempo para las partes, por lo que no ha aceptado esa práctica.

Adelantó que, independientemente del sistema que se elija, se presentarán complicaciones, por lo que reiteró que no se trata de un tema de elegir entre diversas notificaciones o elegir cuál es la que más favorece, puesto que el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada apunta a que el incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo, es decir, la que ya no puede ser recurrible, estimando que no es necesario conocer el contenido de la sentencia para iniciar un incidente de estos, además de que el plazo —de

seis meses— es muy amplio, por lo que no se genera mayor problema y, por ende, debe tomarse en cuenta la primera notificación por parte del órgano resolutor para el cómputo respectivo, la cual podrá ser por lista o personal, dependiendo de su criterio.

Valoró que la otra solución propuesta, aunque pretende ser proteccionista, generará una gran cantidad de problemas que distorsionan el sistema. Así, recalcó que lo único que necesitan saber las partes para hacer valer su garantía o contragarantía es si la sentencia que negó, otorgó o sobreseyó en el amparo —como dijo el señor Ministro Pérez Dayán— ya causó ejecutoria para, en ese momento, empezar a correr los plazos y, si quiere conocer su contenido, pedir copia no le tardará más que dos o tres días, los cuales no representarían un problema para ninguna de las partes. Por esas razones, se refrendó con el sentido del proyecto, con la única sugerencia de aclarar en el rubro que se trata de la ley abrogada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las trece horas y reanudó la sesión a las trece horas con veintidós minutos.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó a favor del proyecto, advirtiendo que ninguno de los señores Ministros ha cuestionado la constitucionalidad del precepto que establece que la notificación, por regla general, se haga por lista y que, por excepción y como se prevé en el artículo 30 de la Ley de Amparo abrogada, se deja en libertad a los

órganos jurisdiccionales de determinar, cuando lo consideren conveniente, notificar personalmente. En ese sentido, establecer que, por regla general, se notifique personalmente, sería una carga a los jueces y, en su caso, a las demás instancias que la ley no les impone, por lo que romper ese sistema implicaría desconocer el mecanismo de la ley.

Apuntó que se debe tomar en cuenta que, ante cuestiones procesales, siempre hay al menos dos partes involucradas, lo que significa que modificar un criterio para beneficiar a una podría traer, como consecuencia, el perjuicio de la otra. En el caso, observó que, aun pasados los seis meses que se prevén, la propia ley establece la posibilidad de hacer efectivo su derecho por la vía civil, por lo que tampoco se deja en estado de indefensión.

La señora Ministra Piña Hernández concordó en que no se está analizando la constitucionalidad del sistema de notificaciones, sino cuál notificación debe tomarse en cuenta para iniciar el plazo para promover el incidente para hacer efectiva la garantía o la contragarantía, y si bien en la práctica de los órganos del Poder Judicial de la Federación se han suscitado problemas, se puede establecer un criterio partiendo de una interpretación del artículo 129, como ya refirieron los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Presidente Aguilar Morales, Cossío Díaz y ella.

Recordó que el artículo 30 de la Ley de Amparo abrogada establecía que, en aquellos casos que se

considerara pertinente, se podría hacer la notificación personal, a lo que esta Suprema Corte, a través de diversas jurisprudencias, ha avanzado en el sentido de que determinadas diligencias y actuaciones que, en términos generales, no están contempladas en la ley, se deben considerar para la notificación personal, por razones de seguridad jurídica. Aclaró que, contrario a lo aducido por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, esta posición no implica que todas las sentencias se notifiquen personalmente, sino sólo en aquellos juicios de amparo en los que exista garantía o contragarantía, en aras de la seguridad jurídica.

El señor Ministro Medina Mora I. se manifestó en favor del proyecto, porque lo importante es dar seguridad jurídica en cuanto al momento para interponer el incidente, siendo la planteada una solución adecuada, coincidiendo además con lo expresado por los señores Ministros Pérez Dayán, Zaldívar Lelo de Larrea, Franco González Salas y Gutiérrez Ortiz Mena.

El señor Ministro Laynez Potisek puntualizó que el plazo de que se trata no es para interponer algún medio de defensa que sea necesario para garantizar la seguridad jurídica, sino que sólo tiene la finalidad de hacer efectiva la garantía o contragarantía, por lo que basta con el contenido del artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, es decir, con la notificación de la ejecutoria —coincidiendo en que no son dos notificaciones— que lleva a cabo esta Suprema Corte o

el tribunal colegiado por lista, con lo cual no se lleva a la parte interesada a correr ningún riesgo de desventaja o inseguridad jurídica, pues basta con que conozca el sentido del fallo para que empiece a correr el término, máxime que, si es su voluntad, puede pedir una copia para reforzar sus argumentos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo aclaró que su postura no significa que el juez de distrito necesariamente tenga que notificar la resolución personalmente, sino que sólo sería deseable, insistiendo en que la Ley de Amparo abrogada no establecía tal necesidad, sino la notificación por lista. Recordó haber señalado que podría generarse mayor certeza jurídica al tomar como base la notificación que realiza el juez de distrito porque, sobre todo en esta Suprema Corte, en muchos casos que provienen de Estados muy lejanos, los interesados en promover el incidente respectivo nunca se enteran de las notificaciones por lista.

La señora Ministra Luna Ramos recalcó que el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada habla de la ejecutoria, no sólo de su sentido, además de que, conforme el diverso precepto 104, debe tomarse en cuenta la notificación que realiza el juez de distrito, cuando recibe de vuelta el expediente, máxime que, como indicó el señor Ministro Pardo Rebolledo, las vías de información en muchos Estados de la República no son tan fáciles como las de la Ciudad de México, sede de esta Suprema Corte.

La señora Ministra Piña Hernández, respecto de lo señalado por el señor Ministro Laynez Potisek, estimó que la solución no busca seguridad jurídica, por tratarse de la interposición de un medio de defensa, sino certeza jurídica, en función de cuándo empezará a correr el plazo en perjuicio del interesado. Estimó que la seguridad jurídica es un valor y, la certeza jurídica, un subvalor.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, la cual se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Presidente Aguilar Morales votaron en contra. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Piña Hernández anunciaron sendos votos particulares.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos, en la inteligencia de que la redacción definitiva de la tesis derivada de esta resolución, cuyo texto debe incluirse en la sentencia correspondiente, una vez aprobado el engrose respectivo, se someterá al procedimiento administrativo que regularmente se sigue ante el Comité de Aprobación de Tesis, en términos de lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo General 20/2013.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con cuarenta minutos, previa convocatoria que emitió a los

integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes nueve de mayo del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.